



Íconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

ISSN: 1390-8065

FLACSO Ecuador

Deon, Joaquín Ulises  
Desmontando bosque, sumando luchas sociales:  
territorialidades y alternativas en el desastre ambiental argentino  
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 70, 2021, Mayo-Agosto, pp. 151-169  
FLACSO Ecuador

DOI: <https://doi.org/doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4567>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50966705009>


- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



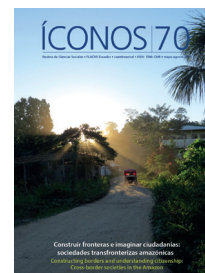
Sistema de Información Científica Redalyc  
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso  
abierto

# Desmontando bosque, sumando luchas sociales: territorialidades y alternativas en el desastre ambiental argentino

*Clearing the forest, adding social struggles: territorialities and alternatives in the Argentinian environmental disaster*

 Lcdo. Joaquín Ulises Deon. Doctorando en Estudios Sociales Agrarios, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. (joaquinudeon@yahoo.com.ar) (<https://orcid.org/0000-0002-6499-9322>)

Recibido: 20/06/2020 • Revisado: 24/09/2020  
Aceptado: 23/02/2021 • Publicado: 01/05/2021



## Resumen

En este artículo se estudian las narrativas colectivas en el contexto de las luchas socioambientales argentinas frente a numerosos desastres ecológicos que han generado alrededor de 95 000 desplazados, entre los años 2010 y 2020. Los datos fueron recogidos mediante metodología cuantitativa de investigación acción-participación; además, se revisaron leyes y publicaciones en redes sociales. El estudio comprueba cómo el complejo desarrollista, en su avanzada colonialista, continúa con el desalojo, desmonte, fumigación y muerte de pueblos y minorías sociales. Con el objetivo de describir las nuevas prácticas del proceso de territorialización y su alto impacto ambiental, se visibilizan las acciones de este complejo de poder que permiten tejer su actual entramado colonialista (particularmente en la provincia de Córdoba). Se indaga en la movilización social emancipatoria, organizada como resistencia frente a tal proceso en las ecorregiones de Gran Chaco y El Espinal. A su vez, se pone en evidencia cómo desde el Estado se ha criminalizado esta lucha, con vistas a romper la articulación social conseguida por las asambleas y movimientos sociales, que han puesto en práctica una construcción colectiva contrahegemónica. Se concluye con la afirmación de que la defensa del bosque y de la vida, tal y como es impulsada por las asambleas socioambientales, desterritorializa progresivamente el agronegocio, la megaminería metalífera y de canteras y el desarrollismo inmobiliario.

*Descriptores:* ambiente; bosque nativo; desarrollismo; luchas sociales; participación; territorio.

## Abstract

This article explores the several collective narratives developed by participants of the social and environmental struggles, in response to the many ecological disasters that plagued Argentina in the last decade. These adversities have resulted in around 95.000 persons being displaced during the same period. Quantitative data was gathered by means of an active participant observation methodology. Additionally, legislation and social media posts were also inspected. The present study provides evidence that the advance of colonialist development plans has resulted in a sustained clearing of forests, fumigation and extermination of minority peoples and social groups. The actions of the powerful power networks behind these current colonialist practices are visualized and the high environmental impact of their territorialization practices is illuminated (particularly in the province of Cordoba). Resistance against the above process in the Gran Chaco and Espinal ecoregions is researched as a case of emancipatory social action. Likewise, it becomes evident how the State has criminalized these struggles in its attempts to break down the social coalitions built by the assemblies and social movements, involved in building a collective counter hegemony. Finally, the conclusion is reached that the defense of forests and life, as driven by the socio environmental assemblies is progressively uprooting agribusiness, large scale metallic mining, quarries and real estate development.

*Keywords:* environment; native forests; developmentalism; social struggles; participation; territory.

## 1. Introducción

En los últimos diez años, autores como Seoane et al. (2013); Zibechi (2015a); Wahren 2015 y Gudynas (2015) han reclamado la necesidad de pensar y accionar en una nueva relación, o simplemente, avanzar hacia una mayor concreción de organizaciones de base y movimientos sociales. Entre ellos se puede mencionar a movimientos urbanos, rurales, obreros, de desocupados, campesinos, de lucha contra la violencia de género, por los derechos de las comunidades originarias y afroamericanas, así como de sectores afectados por conflictos ambientales, de las víctimas de la violencia y represión del Estado, del “gatillo fácil”.

Esta demanda se sustenta en la emergencia de lo que Machado y Zibechi (2016) han denominado “sociedades otras en movimiento”; o en movimientos sociales que se articulan y entretajan en redes cada vez más sólidas con otros movimientos (Tapia 2009); o de las asambleas ciudadanas y organizaciones de base. Se trata de tejidos fortalecidos en el contexto –y como contraparte– de una potenciación de políticas desarrollistas neoliberales, en un nuevo periodo de avance de las derechas colonialistas internas que también tejen sus redes con mayor fuerza, para sostener el modelo extractivista (Seoane et al. 2013). Dicho modelo sustenta y motiva la conformación, acción e institucionalización de lo que González Casanova (citado en Porto Gonçalves 2008) calificó de complejo técnico-científico-industrial-financiero-mediático-militar, configurador de nuevas territorialidades rurales, urbanas y mixtas. Estas territorialidades refuerzan la demanda de colaboración y lucha común de las sociedades en resistencia, la movilización y el cambio social, desde una otredad diversa y en movimiento, y que va concretándose ya en la realidad y no solamente en una dimensión teórica.

Con este análisis se aspira a abordar las llamadas “territorialidades, desterritorialidades y reterritorialidades” (Porto Gonçalves 2016) de estos tejidos tensionados en torno al uso del suelo, el agua y los bosques, en particular en una región de América Latina: la provincia de Córdoba, en Argentina. Para ello es necesario avanzar más allá de preguntas surgidas en trabajos anteriores (Deon 2016; Páez, Deon y Camacho 2017), a saber: ¿Se está caminando hacia un movimiento contra los desmontes en Córdoba? ¿Qué territorialidades y desterritorialidades están emergiendo en Córdoba como alternativas sociales surgidas a raíz de las luchas campesinas, originarias (camichingonas-sanavironas),<sup>1</sup> ambientales, sanitarias, contra la violencia estatal, entre otras?

1 Camiar-comechingonas o caminchingonas, ranqueles y sanavironas son los nombres de los pueblos nación nativos de lo que hoy es la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. Estas comunidades habitaban las sierras, los valles interserranos y el piedemonte. Actualmente, una treintena de comunidades luchan contra y más allá del silenciamiento, la negación y el despojo que tanto el Estado como las empresas desarrollistas y amplios sectores de la sociedad civil buscan seguir fomentando desterritorializándolos. Ante este continuo despojo, las comunidades indígenas de Córdoba narran sus crónicas familiares, sostienen y recuperan saberes y prácticas ancestrales para sostener y recuperar los territorios donde hoy, poco a poco, se tejen entre sí y junto con asambleas socioterritoriales-ambientales.

Estas preguntas, si bien son bastante abarcadoras, permitirán avanzar en el cuestionamiento y respuesta a las hipótesis sobre si en la provincia de Córdoba se verifica la consolidación de un campo político-cultural, que tenga en su haber un tejido de resistencias y accionares sociales que se organicen con fuerza, aunque lentamente. También se intenta averiguar en qué medida estos factores ponen en tensión y desterritorializan la hegemonía empresarial y estatal expresada en el complejo desarrollista, con implicaciones directas en el ambiente y la salud.

Se inicia con una discusión sobre el desarrollo económico y las implicaciones territoriales del desarrollismo. Posteriormente se destacan las resistencias y estrategias para avanzar “en contra y más allá” de los desastres ambientales causados por los desmontes del complejo desarrollista, y que movilizan a asambleas y movimientos sociales en la provincia de Córdoba, Argentina. La evaluación aquí realizada parte de la observación directa, puesto que el autor tuvo oportunidad de formar parte de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.

## 2. Implicaciones territoriales del desarrollismo

¿Reacomodo o continuidad?, el desarrollo como política gubernamental y empresarial se ha afianzado, de un modo casi colonial, en los círculos de poder de los países de América Latina, durante los últimos veinte años. Gudynas (2012) y Escobar (2010), entre otros autores, plantean que después de un retroceso, la perspectivas del desarrollo (originadas algunas desde las teorías de la dependencia) han venido a integrarse nuevamente a las políticas empresariales y gubernamentales en un nuevo contexto, que incluye el combate contra la pobreza –y a menudo contra los pobres– y frente al cambio climático mundial considerado solo en su condición natural, pero pocas veces en su aspecto ambiental, o sea, incluyendo las relaciones de poder y las consecuencias del sistema productivo, urbano, extractivo, de mercado y de los medios masivos de comunicación, sobre los ecosistemas y ambientes regionales.

El desarrollismo como pasión y acción capitalista (neo)liberal viene a definirse como el conjunto de acciones –y aquí el orden sí altera el producto, según las reglas del sistema-mundo capitalista– económicas, privadas, financieras, gubernamentales y sociales que buscan generar un cambio favorable en las condiciones de acumulación y reproducción del capital, en las condiciones económicas, infraestructurales, residenciales, de servicios, de salud, culturales, ambientales en un territorio y población determinados (fundamentalmente considerados por organismos internacionales e instituciones de los centros de poder nacionales como no desarrollados o desigualmente desarrollados).

En Argentina, el desarrollismo comenzó a afianzarse poco a poco tras los golpes militares de los años 50 y 60. En este periodo, las “recetas” económicas liberales in-

cluían la liberación impositiva a la exportación de las llamadas *commodities*<sup>2</sup> forestales (maderas duras provenientes del bosque chaqueño y carbón vegetal), agrícolas (fundamentalmente trigo y maíz) y el desarrollo de instituciones nacionales tecnológicas agrarias para el estudio genético y el mejoramiento de semillas y técnicas agrícola-ganaderas.

Aquí el sistema-mundo capitalista se expresaba “en términos de una verdadera contrarreforma agraria, donde la agricultura campesina o familiar de menos escala se destruye bajo el pretexto de su baja productividad, frente a otros cultivos” (Hocsman 2014, 45). Con ellas se destruía también el bosque nativo y los cuerpos de agua, y se insertaba el país, ya desde la década de los 30, en una ecología-mundo capitalista (Moore 2013) que valida, cada vez más, el saqueo de bienes comunes y la desterritorialización de comunidades campesinas, indígenas o de origen africano.

De lo anterior se puede plantear que las políticas liberales y neoliberales contribuyeron a ordenar, agilizar y dinamizar, a través del desarrollismo, el cambio a favor de la acumulación de la tierra, el poder y el capital en menos manos (Merlinsky 2017). Esto deteriora el cambio social en favor de la disminución de las desigualdades económico-estructurales de la población y los territorios nacionales. Por el contrario, se consolidó cada vez con más fuerza un colonialismo no solamente eurocéntrico o norteamericano, sino que se configuró un grupo hegemónico de poder que decide y acciona a través del Estado. Un colonialismo interno, entendido como un conjunto de grupos de poder que accionan y direccionan las políticas económicas, sociales e infraestructurales para favorecer su acumulación y reproducción capitalista, a costa de la opresión social y de la acumulación de la plusvalía, la renta de la tierra y la posesión de medios masivos de comunicación; colonialismo interno que actúa como “vector de difusión de los patrones y las normas de globalización del sistema-mundo capitalista, directamente en las escalas locales” (González Casanova 2006, 415).<sup>3</sup>

Las implicaciones ambientales de este desarrollismo progresista (Zibechi 2015b) y neoliberal aún están siendo asumidas por poblaciones enteras en la Argentina y en otros países, en el contexto de la emergencia climático-ambiental global. En Argentina, tales implicaciones tuvieron un impacto directo en lo ambiental: el régimen de tormentas severas a graves se multiplicó por cinco en los últimos treinta años respecto al periodo 1910-1960. Además, en las últimas dos décadas el número de desplazados ambientales<sup>4</sup> fue de más de 150 000 personas, superando en más de un 300 % a los

2 Con este término se designa a las materias primas básicas que cotizan en las bolsas de valor del mercado global y que se constituyen sobre la base de productos más complejos.

3 Para este autor, el colonialismo interno no debe ir separado de otras categorías y procesos como la lucha por las autonomías y la dignidad de los pueblos y las personas. El colonialismo interno se manifiesta transnacionalmente, pero también se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados (González Casanova 2006).

4 Entiéndase por desplazados ambientales al conjunto de personas que deben abandonar su residencia por un periodo mayor a un año por las consecuencias y riesgos que implicó alguna catástrofe ambiental. Se entiende aquí por catástrofe ambiental a las implicaciones del impacto de las actividades de una sociedad en el ambiente del que es parte.

veinte años anteriores; de estos, el 70 % en áreas mediterráneas del Gran Chaco. Si a ello se le suma los campesinos y comunidades originarias desalojados por el avance de la frontera agraria y ganadera, por agentes inmobiliarios y político-judiciales colonialistas internos para la realización de complejos edilicios o barrios de élite, el número asciende a 850 000 personas, de acuerdo con datos de la Red Agroforestal Chaco, en el año 2010,<sup>5</sup> y de los informes de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Nacional, en el año 2016 (Natenzon y Ríos 2016).

En total, solo entre los años 1990 y 2016 se desmontaron y homogeneizaron productivamente siete millones de hectáreas en Argentina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubicando al país como la sexta nación con más desmontes en el mundo.

Las provincias de Chaco, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, además de ser las que poseen las mayores disparidades económicas entre ricos y pobres del país (INDEC 2015), son las que viven este proceso de desmonte con mayor cercanía. Estos son ejecutados por lo que se ha denominado el complejo técnico-científico-industrial-financiero-mediático-militar-(policial) desarrollista. Sin embargo, empieza a encontrar resistencias a la territorialización en el Gran Chaco, por parte de las personas desalojadas o que están a punto de enfrentar este proceso, que sufren hostigamientos por grupos armados privados, policiales, judiciales, mediático-comunicacionales, de quienes padecen la contaminación y muerte por las fumigaciones, inundaciones, sequías prolongadas, la inundación de sus tierras por represas y el desmonte de las reservas naturales que decidieron crear para proteger los manantiales o sus áreas de usos ancestrales, patrimoniales y comunales.

### 3. ¿Cómo desmontar amparados por las leyes 9814 y 9841 hechas a la medida de los intereses empresariales? El caso de la provincia de Córdoba

En la mediterránea provincia de Córdoba, Argentina, las resistencias están en pie y articuladas en el campo y la ciudad, entre comunidades camiar-comechingonas y asambleas socioambientales, entre las personas nacidas y criadas, entre los venidos y los quedados (nuevos rurales), entre los desplazados por las inundaciones o por las sequías. En esta provincia es frecuente afirmar: “basta de desmonte, el bosque es vida, el bosque es agua, sin bosque no hay agua, sin bosque nos inundamos” (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo Córdoba, Carta abierta del 16 de diciembre de 2017).

Se está resistiendo al complejo desarrollista, debido a que se han perdido 1,6 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos veinte años. De las 16 532 100 hectáreas totales, la mayoría se arrasaron entre 1920 y 1980 a manos de los desmontes e incendios para el avance del proceso de sojización en el llano, de la bovinización

<sup>5</sup> Véase Aranda (2010).

(desarrollo ganadero extensivo, en las áreas extrapampeanas serranas y de valles) y de la urbanización (turística y de élite) en áreas serranas y próximas a la ciudad de Córdoba —que hoy posee alrededor de 1,4 millones de habitantes y se ubica como segunda ciudad más poblada del país—.

La lucha indígena, campesina y asamblearia socioambiental, que veía en el cuidado del bosque el camino para la solución de los problemas ambientales regionales relacionados con las inundaciones y las sequías, elaboraba a la vez una propuesta para habitar y trabajar la tierra con los bosques nativos presentes en ella. Pero los sectores ruralistas y desarrollistas querían monocultivos y producción forestal o silvopastoril en los territorios de Gran Chaco y El Espinal (Zarrilli 2020).

Debido a este último punto, las luchas de las asambleas socioambientales reclamaban la protección del escaso bosque nativo existente en la provincia en todos sus niveles (herbáceos, arbustivos, fachinales, pastizales de altura, bosques maduros). Se profundizaba de esta forma el conflicto entre dos espacios sociales: uno productivista-desarrollista y el otro de base centrada en los bienes comunes y la economía solidaria y heterogénea.

En 2007 se aprobó la Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Esta ley obliga a las provincias a que se realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), a través de la conformación de una comisión que determine el proceso participativo para la elaboración de la ley y de un mapa que categorización a los bosques como zona roja (de máxima protección), zona amarilla (de protección y de transformación solo a categoría roja) y zona verde (donde se pueden desarrollar prácticas económicas).

En 2008, a la par del existente conflicto ruralista por las retenciones nacionales y ante los rumores de la convocatoria de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) por parte del gobierno provincial, Córdoba sufría los mayores incendios de la década. A tan solo un año y unos días de comenzado el conflicto por las retenciones y la Resolución 125/2008 se quemaron más de 120 000 hectáreas de bosques nativos, un valor que está lejos de las 410 000 hectáreas incendiadas en el año 2020, en que se reiniciaría el debate por dicha ley (Deon 2020).

La COTBN (equipo de maestros idóneos, campesinos, miembros de comunidades originarias, viejos conocedores del monte, académicos, técnicos y otras personas) inició un doble proceso metodológico: la construcción del mapa con las distintas variables (comunidades originarias y uso campesino, fragilidad ambiental, cuencas, pendientes, estado del bosque de maderas duras, de los montes bajos, de los pastizales, de los arbustales, de los cuerpos de agua, de los usos agrícola-ganaderos, de los centros poblacionales, y otras) que permitirían llegar a los tres colores; y la elaboración de la metodología del proceso participativo. En dos años, miles de agentes participaron en los siete talleres que se dividieron en correspondientes cuencas hídricas de la provincia, con actividades específicas. La primera ley ambiental con participación



vinculante real en la provincia y el país fue presentada a mediados del 2010, en la Comisión de Asuntos Ecológicos de Legislatura.

En 2009, seis meses después del conflicto contra la implementación de la Resolución 125/2008, que paralizó al país, haciendo visible el accionar del complejo desarrollista de agronegocios minero-inmobiliario-mediáticos, el complejo ruralista<sup>6</sup> volvió a protagonizar un hecho similar, específicamente en la provincia de Córdoba y relacionado directamente con el conflicto ambiental por los bosques nativos.

Ya en el recinto legislativo, la COTBN anticipaba una cuestión: en los tres años desde que fuera sancionada la Ley Nacional 26331, se detectó que se había desmontado alrededor de un 2 % de la superficie total de la provincia (cerca de 330 642 hectáreas). Por ello resultaba urgente la aprobación y la puesta en funcionamiento de un plan de control y recuperación del bosque nativo (Silveti et al. 2013).

Pocos días antes del 5 de agosto de 2010, informaban que el proyecto original de la COTBN había sido modificado en base a un proyecto elaborado por legisladores del oficialismo (Unión por Córdoba, Partido Justicialista) junto a la Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CE-MINCOR), la Sociedad Rural de Córdoba (SRC), la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), la Federación Agraria (FA), Comité de Agricultores de la Tercera Zona (CARTEZ), académicos y otros grupos empresarios afines. Se llegó a aprobar el 5 de agosto una ley para desmontar a medida del complejo desarrollista.

El gran descontento de la ciudadanía fuera del recinto legislativo no se hizo esperar, y tampoco la represión policial. La experiencia sirvió para otras leyes de desmonte en otras provincias argentinas donde el desarrollismo avanzaba a fuera de desmontes y despojos de territorios comunes a la vida, territorios indígenas y campesinos (como sucede en Salta, Jujuy, Chaco y Tucumán).

Tras la aprobación de la Ley 9814 el 5 de agosto de 2010, no tardó en llegar la tormenta de demandas de universidades (la Universidad Nacional de Río Cuarto fue la primera), varias ONG, del Movimiento Campesino, entre otras. Legalmente, la ley entró por dos años en un estado de inconstitucionalidad, lo cual facilitó que el fuego se llevara más de 55 000 hectáreas, la mayoría de ellas en áreas periurbanas. A varios días de apagado el incendio, comenzó la estrategia territorializadora del desarrollismo inmobiliario: los circuitos de enduro, cuadriciclos, motocrós. Actualmente la Ley 9814, en su artículo 2, prohíbe que el bosque incendiado sea desmontado, pero no proscribía que se pueda cambiar el uso del suelo (aspecto que sí estipulaba el proyecto de la COTBN).

Las asambleas ciudadanas y organizaciones de base que, en las regiones de las Sierras de Pocho, Traslasierra,<sup>7</sup> Punilla y Sierras Chicas, venían frenando el avance minero metalífero y de uranio con el apoyo de comunas y algunos municipios (y que en el

<sup>6</sup> Comandado por el Comité de Agricultores de la Tercera Zona, la Sociedad Rural de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María

<sup>7</sup> Para ampliar en torno a la conflictividad en las cuencas de Traslasierra, Córdoba, se recomienda consultar el trabajo de Garnero (2017).



año 2008 lograron la Ley Provincial 9526 de prohibición de la minería metalífera y de uranio a cielo abierto), se encontraban ahora también luchando contra una nueva ley pro minera que atenta contra las serranías. La Ley 9814 facilitaba la aprobación de nuevos desmontes para explotación minera no metalífera.

Hoy estas asambleas se encuentran luchando contra la nueva Ley Provincial 9814, porque en su artículo 37 plantea: “Dado su carácter transitorio, está permitida la actividad minera en todas las categorías de conservación, previo Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación, de conformidad a la normativa ambiental y minera vigente en la Provincia de Córdoba” (Ley 9814, art. 37). Los impactos ambientales de esta política de destrucción continuaron. El ecocidio arrebató cada vez más hectáreas de suelo.

En el año 2012, Sierras Chicas y Punilla fueron las primeras regiones cordobesas en estallar socialmente por el desastre ambiental que sufren sus cuencas serranas debido a los desmontes. Las asambleas llegaron a organizar su resistencia como verdaderos territorios-cuenca, donde las relaciones de poder en torno al uso de la tierra y el agua (Deon 2015) llevaron a fuertes conflictos con el complejo desarrollista. Estos hechos condujeron a la creación de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos. Esta red de asambleas vecinales contra los barrios cerrados, mineras y circuitos de enduro comenzó a movilizarse, a organizar eventos artísticos, marchas, ordenamientos territoriales comunitarios y de áreas protegidas comunitarias o reservas hídricas naturales (Páez, Deon y Camacho 2017), entre otras acciones.

Durante el periodo de sequía entre los años 2008-2013, la aprobación de construcción de cinco urbanizaciones de élite (dos con canchas de golf con riego, mientras la sequía perduraba) y el acaparamiento de 5000 hectáreas de bosques con fines mineros enardecieron a las comunidades locales en la red. A la vez, en el norte provincial, el Movimiento Campesino de Córdoba inició una lucha muy desigual con muchos empresarios que desalojaban a familias habitantes ancestrales (como el caso de Ramona Bustamante y otros) a la vez que frenaban, cuerpo a cuerpo, el desmonte de miles de hectáreas de bosque chaqueño.

No es menor destacar que las territorializaciones del complejo desarrollista se pretendían localizar (y más de la mitad, en efecto, se localizaron) en la zona roja y amarilla de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 9814, pero no solo se encontraron con las resistencias presentadas, sino que muchas de ellas crecieron y tuvieron implicaciones directas en agentes del poder, como funcionarios públicos detenidos e imputados. El enojo y el descontento de las personas, que cada vez se iban movilizando más, continuó. La Ley 9814 no fue reconocida por el gobierno nacional tras la demanda iniciada por la Universidad de Río Cuarto.<sup>8</sup>

Aún sin ley, el bosque se sigue desmontando. El desastre ambiental al que lleva el complejo desarrollista contribuyó a que los días 12 de febrero de 2013 en Sierras

8 Para leer la demanda véase: <https://bit.ly/3p96c99>, acceso el 12 de enero de 2021.

Chicas, el 18 diciembre de 2014 en el sur de Córdoba y el 14, 15 y 21 de febrero de 2015 en Punilla, Sierras Chicas y el Este de la provincia de Córdoba, se vivieran las inundaciones que más víctimas ocasionaron en la historia de estas provincias: 22 personas muertas, cientos de heridos y miles de viviendas destruidas.

Las problemáticas se profundizan y, mientras el desmonte continúa y el desarrollo inmobiliario lo acompaña, ahora es posible ampliar la definición del complejo a *político-empresario-recreativo-mediático-comunicacional-académico*, ya que agentes de las universidades Blas Pascal y Empresarial Siglo XXI, ambas entidades privadas, y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se unían a conglomerados empresariales como la Fundación en Defensa del Agua (FUNDEA),<sup>9</sup> o la Fundación Córdoba Mejora (Schneider, De Luca y Dassano 2018). El complejo desarrollista busca así construir un discurso ecoamigable de producir y construir conservando.

De igual manera, no abandona su territorialidad y avanza ahora con el Grupo SICER, organizador de carreras de enduro y cuatriciclos en zonas rojas y amarillas de la Ley de Bosques, modifican el suelo y el bosque, financiados por empresas desarrollistas inmobiliarias (Juárez Beltrán, Edisur, Gama SA, Tagle S.A.) y la Cámara de Empresas Mineras. De esta forma hacen de la práctica deportiva del enduro la base para desmontar sin incendiar, pero cambiar el uso del suelo, para luego urbanizar o avanzar con la producción silvopastoril en áreas prohibidas por la Ley Nacional 26331.

#### 4. El avance de la criminalización de la protesta y la resistencia

Desde el año 2012, en el que se tejieron amplias redes de vecinos en asambleas y organizaciones de base, se tuvo conocimiento de que la Gendarmería Nacional, a través de su área de inteligencia, había creado el llamado “Proyecto X”, y que todas estas organizaciones estaban en la lista a la que se pudo acceder. Este proyecto de inteligencia de gobierno consistía en registrar a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales movilizadas y en resistencia por problemáticas ambientales, barriales, estudiantiles, culturales, LGTBIQ, y cualquier otra que no estuviera institucionalizada (es decir, que no fuera una ONG o una fundación); luego vigilaba su accionar y sus movimientos (Bonavena y Nieves 2014). Advertidas o no del “Proyecto X”, muchas organizaciones sufrieron entre 2012 y 2014 el pirateo de su información organizacional, páginas web, redes sociales y correos electrónicos.

A su vez, se conoció que más de 200 intendentes y jefes comunales habían comenzado a viajar a Estados Unidos e Israel para asistir a cursos de gestión pública y segu-

<sup>9</sup> FUNDEA es una fundación creada en el 2012 por el grupo Roggio S.A. (la mayor empresa constructora de la provincia y una de las mayores de Argentina), ingenieros empresarios (Santiago Reyna), y políticos de la provincia (el exintendente Rubén Martí). FUNDEA busca fortalecer la “defensa del agua” a través de la realización de obras públicas y privadas, como el canal Los Molinos-Córdoba, que abastece de agua a más de 800 000 habitantes de la zona sur del Área Metropolitana Córdoba, o los canales privados que se querían construir para abastecer los riegos en campos de miembros de la Sociedad Rural de Jesús María. Ver: <https://bit.ly/2KAD1gf>, acceso el 11 de febrero de 2020.

riedad de datos impartidos por la CIA, la DEA y el Ministerio de Defensa de Israel, financiados por el Banco Mundial y empresas multinacionales farmacéuticas (Bayer), de agua (Danone, Nestlé, Suez), seguridad (Securitas) y alimentarias. Al regresar, muchos de estos intendentes o jefes comunales contaron y acercaron a miembros de las asambleas al programa de una de las jornadas del curso “El terrorismo del siglo XXI: los movimientos sociales, los indígenas, el campesinado y los ambientalistas”. Al mismo tiempo, se capacitó a los jefes de gobierno de las ciudades y pueblos para fortalecer la seguridad ciudadana con cuerpos especiales de seguridad urbana, preparados para actuar ante este terrorismo. Por ello es necesario incluir en el complejo desarrollista a las fuerzas de seguridad.

Mientras este complejo desarrollista actúa, el movimiento campesino avanza en la inscripción de más de 200 planes de conservación que les permitirá a sus miembros percibir un ingreso pagado por el Estado, por los servicios ambientales que presta el bosque que ellos protegen, y que brinda alimento, medicinas y donde existe el proyecto *Monte adentro, el mercado campesino*, que posibilita la venta de sus productos en la ciudad (Paz y Rebollo, 2020).

En la ciudad de Córdoba, las marchas por la emergencia ambiental de 2014 y 2015 articularon por primera vez a todas las organizaciones de lucha campesina, contra mineras, pueblos fumigados, en defensa de las reservas naturales y contra la empresa Monsanto. Esto último demostró hasta qué punto crítico había llegado la situación: en 2015, tras dos años del acampe en la entrada a la planta que se intentó construir desde la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas, y tras varios intentos violentos de desalojo forzoso de la asamblea del acampe contra Monsanto por parte de la policía de Córdoba (añádase a esto varias marchas multitudinarias replicadas en ocho países) la empresa se vio forzada a cambiar el proyecto y presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. En medio de esta situación, el gobierno provincial ingresó un proyecto de ley en la Legislatura para tratar de calmar el conflicto, sancionando la Ley 10208 de política ambiental y exigiendo a Monsanto muchos más requisitos para instalarse, generando el retiro de la empresa y su proyecto de la provincia (Tito 2019).

Esta desterritorialización fue posible gracias al tejido asambleario y organizacional de base que se consolidó en Malvinas argentinas, y también en todas las instancias del Juicio de Madres de Barrio Ituzaingó contra las fumigaciones y su impacto en la salud. Otra ganancia de la lucha se manifestó en los 31 municipios y comunas que aprobaron ordenanzas y resoluciones prohibiendo las fumigaciones (unas 185 000 hectáreas donde no podrá realizarse monocultivos con implementos tóxicos) que generan cáncer o muerte en pueblos y barrios de ciudades (Ávila Vázquez 2014; Balmaceda, Deon y Omaña 2019).

En la provincia existen, además, 31 áreas comunitarias protegidas, creadas para resguardar el bosque y las actividades deportivas, culturales, científicas y educativas.

Todas ellas suman unas 360 000 hectáreas donde se disputa al complejo minero de canteras el territorio que este desea para llevar adelante el plan de remineralización de la región pampeana. Este plan del CEMINCOR contempla el cierre de caminos públicos, el acaparamiento minero de tierras en reservas hídricas y recreativas naturales como las de Sierras Chicas (que fueron creadas tras la inundación de 12 de marzo el 2000, con el fin de disminuir el riesgo ante eventos futuros de este tipo y para frenar el avance del desmonte). Fundamentalmente, el plan de CEMINCOR ha propuesto un avance minero en las cuencas serranas para producir harinas minerales y así “devolver la fertilidad a la tierra rural de la pampa argentina, a partir de la venta de minerales y fertilizantes” (CEMINCOR 2019).<sup>10</sup>

Más allá de este conflicto entre asambleas que defienden las áreas comunitarias protegidas y las mineras, esta propuesta de Reservas Hídricas y Naturales (RHN) dio pie para implementar estas experiencias a otras comunas y municipios con problemáticas similares, las que hoy están sumadas a este tejido asambleario-organizacional que lucha por la vida, el monte, la tierra y el agua, dispuestos a afirmarse contra el complejo desarrollista. Es central destacar que la estrategia de creación de RHN no es similar a la de Parques Nacionales, sino que pretende resguardar las cuencas hídricas mediante la reglamentación de estrategias para habitar con los bosques nativos y producir agroecológicamente. Las RHN se forjan desde colectivos sociales locales que habitan las cuencas serranas y que se autorganizan en asambleas, mesas vecinales, espacios feministas, barriadas autónomas (como Los Chañares en Tanti, San Jorge en Cosquín, Los Manantiales en Río Ceballos, Cabana en Unquillo, el ecobarrio de Salsipuedes, entre otros).

## 5. Territorialidades del complejo empresario-político-comunicacional-recreativo-policial

La Ley Nacional 26331 explicita que las leyes provinciales deben revisar participativamente sus OTBN cada cinco años. Por ende, a finales de 2015 la provincia debía convocar a una nueva COTBN de manera urgente para la actualización de la Ley Provincial 9814 de OTBN. Solo así se pondría fin a la inconstitucionalidad existente, facilitando al gobierno nacional el giro de fondos que estipula la ley para garantizar los planes de manejo y conservación del bosque presentados.<sup>11</sup>

En la mencionada fecha, la provincia convocó a la COTBN, presidida esta vez por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Esta dio participación al Foro Am-

10 Para ampliar ver: <http://cemincor.org.ar/que-es-cemincor/>, acceso el 12 de julio de 2020.

11 Del total de 282 planes de conservación presentados hasta 2015, 200 son del Movimiento Campesino de Córdoba, más de 70 son de propietarios de campos en los que no pudieron desmontar por afloramientos rocosos o por otros problemas de suelo (20 de ellos pertenecen a funcionarios del gobierno investigados ya que los campos ya han sido desmontados, y los restantes son de la Fundación Vida Silvestre, y otras asociaciones que poseen allí reservas naturales privadas con fines turísticos o de investigación).

biental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba (únicos grupos no miembros del complejo desarrollista), la Cámara de Empresarios Mineros, la Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios, a la Sociedad Rural de Córdoba, al CARTEZ y otras organizaciones de la mesa de enlace. Esta COTBN elaboró un protocolo de trabajo, pero en agosto de 2016 este sería desarmado porque el complejo desarrollista ya tenía confeccionado el proyecto de ley.

El tejido de asambleas y organizaciones de base de toda la provincia, alertados de la situación, se reúnen a comienzos de noviembre en la ciudad de Córdoba y comprenden que la conferencia buscaba el permiso para el desmonte químico, la producción ganadera intensiva silvopastoril, el desmonte de aquellas áreas donde hubiera bosque nativo con especies exóticas invasoras, y la producción forestal intensiva. Dicho proyecto iba, incluso, en contra de las recientes leyes (10208, 26331, Resoluciones del COFEMA) sancionadas con ocasión de la creciente conflictividad ambiental.

Mientras tanto, los municipios de Sierras Chicas actualizaban con proyectos de ordenanza las Leyes 9841 y 10004 (para el planeamiento del Área Metropolitana de Córdoba), y presionados por el Instituto de Planeamiento del Área metropolitana (IPLAM), un organismo del gobierno provincial ocupado por arquitectos urbanistas miembros de empresas desarrollistas inmobiliarias, propusieron avanzar sobre más de 20 000 hectáreas de bosque. En esta región, importante territorio en resistencia al desarrollismo y rica en experiencias de alternativas societales al mismo,<sup>12</sup> fue donde se realizó la primera de las 33 asambleas provinciales que hasta el momento se han realizado, para evitar el avance desarrollista con una ley todavía en proceso de aprobación por parte de la Legislatura. Nació allí la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA).<sup>13</sup>

Tras presentarse más de quince veces en la Legislatura, el 28 de diciembre (el mismo día de cierre de sesiones) antes de que se aprobara la ley, la CODEBONA realizó una manifestación de más de 30 000 personas. Desde la Legislatura, cinco de los seis bloques opositores al oficialismo no le dieron apoyo a la nueva Ley de Bosques del complejo desarrollista, consiguiendo así la no aprobación. En el verano de 2017, los festivales, peñas y encuentros del verano se poblaron poco a poco de canciones, remeras, banderas y carteles para difundir la lucha de la CODEBONA. En Cosquín, durante los días del Festival Nacional de Folclore, más de 15 000 personas se movilizaron en el marco de la tradicional marcha por la tierra y el agua, a la que este año se sumaba de lleno el reclamo por los bosques.

A fines de febrero, el complejo desarrollista dirigido por el CARTEZ y la SRC emitió un comunicado buscando amedrentar a algunos artistas (José Luis Serrano, Raly

12 Aquí se consolidaron y se sostienen las Reservas Naturales de Sierras Chicas, tres de las cuales poseen planes de ordenamientos territoriales, uso del suelo y planes de manejo construidos participativamente (Deon 2016) desde las asambleas y organizaciones sociales movilizadas y aprobadas por el Estado Municipal (Chiavassa, Ensabella y Deon 2017), además poseen experiencias avanzadas de bioconstrucción, ferias agroecológicas de producciones locales, brigadistas ambientales para incendios, pedagogías escolares y redes educativas serranas, etc.

13 Para más información ver: Página de Facebook de Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo <https://bit.ly/2Mh08gc>, acceso el 1 de octubre de 2017.

Barrionuevo y otros), y comenzó una serie de reuniones en las Sociedades Rurales en aras de profundizar su accionar con manifestaciones (que no llegaron a concretarse) contra la CODEBONA y el Estado Provincial por no aprobar la ley. A comienzos de 2017, una nueva marcha de la CODEBONA ante el intento de tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura movilizó más de 40 000 personas de manera pacífica, en una manifestación caracterizada por la multiplicidad de expresiones artísticas que representaron la diversidad cultural, biológica y los beneficios del bosque chaqueño a las comunidades locales. Ese día la ley no se aprobó, y tampoco pudo sancionarse en mayo, producto a una nueva marcha multitudinaria.

## 6. Reflexiones

La CODEBONA como experiencia colectiva ha definido un nuevo camino basado en la expresión autogestiva, artístico-cultural y en resistencia al complejo desarrollista. Si bien no es una lucha autonomista, sí es un combate emancipador, ya que también logró construir la Quinta Cartilla de presupuestos mínimos de participación (un acuerdo metodológico común, constituido en siete asambleas populares, para definir como se llevará adelante el proceso de participación para la Ley de Bosques). Se plantea esto como proceso emancipatorio, ya que se busca decidir en los territorios con un mecanismo del calibre de las audiencias públicas, que son consideradas como no vinculantes por parte del Estado, y que la ciudadanía movilizada desde colectivos minoritarios unidos, con el derecho de defender su territorio y ambiente.

Pero el 3 de agosto de 2017 se aprobó la Ley Agroforestal Provincial, y no hubo ni audiencias públicas ni espacios de participación. Los únicos dos bloques que se opusieron en la Legislatura rechazaron la ley por considerarla una medida de promoción industrial encubierta, que beneficia a los productores madereros, entre ellos la empresa multinacional Arauco, S.A. Una ley que, en comunidad con su compañera la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, vino a fracturar (aunque no a romper completamente) las relaciones entre el movimiento socioambiental contra los desmontes y el movimiento campesino de Córdoba.

Esta ley es el corolario más actual de la territorialización a través de la colonialidad interna y externa del complejo desarrollista en lo local, sobre todo porque prevé la obligatoriedad de forestación del solo el 2 % de la superficie de los campos con especies exóticas o nativas, producidas en la selva paranense. Al respecto, la CODEBONA denunció que

se trata de un instrumento de fomento económico al establecimiento de monocultivos de pino y eucalipto, mediante el cual el Estado bonifica la plantación de estas especies exóticas para Córdoba, a su vez que invirtiendo millones en la compra de árboles mi-



sioneros clonados comprados a empresas (Biofábrica S. A.) que trabajan con la biogenética del bosque paranense que también está en riesgo al igual que sus comunidades, a la vez que esta ley pretende beneficiar a los grupos económicos del agronegocio con bonificaciones a sus costos de producción (CODEBONA, comunicado del 20 de agosto de 2017, publicado en sus redes sociales).

A su vez, para afrontar el desastre ambiental, el Banco Mundial financió una serie de obras hídricas para controlar las inundaciones en Sierras Chicas (Cabana, Unquillo y Ascochinga, La Granja) y el este y sur cordobés. Sin embargo, estas no se concretarán, debido a que las comunidades se han movilizado y articulado entre sí (y junto a la CODEBONA) para frenar los proyectos, tras conocer a través de los Estudios de Impacto Ambiental que las propuestas de represas buscaban facilitar el riego de campos con soja o grandes establecimientos ganaderos y convertirse en espacio para la recreación exclusiva de megaurbanizaciones cerradas de élite.

La tensión ha continuado hasta ponerle freno al megaproyecto de Autovía de Punilla (que pretende desmontar 15 000 hectáreas y alterar más de 20 microcuencas tributarias del río Cosquín) en el marco del Plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en una articulación histórica (más allá de sus diferencias ontoepistémicas) entre el pueblo nación comechingón y las asambleas socio-ambientales locales de todo Punilla y Sierras Chicas.

Las articulaciones que permitieron resistir a estos procesos, de lucha indígena, asambleario ambiental y campesina, son las que hace más de cinco años se comenzaron a afianzar también en la organización y participación de la Mesa de Derechos Humanos, que anualmente organiza una marcha el 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. Se trata de los mismos entramados sociales que se tejieron en redes sólidas con el colectivo de jóvenes contra la violencia y represión del Estado, que anualmente realizan la Marcha de la Gorra; las comunidades del pueblo nación camiar caminchingón o comechingón, sanaviron y ranquel, el colectivo de madres y familiares de víctimas del “gatillo fácil”; las feministas avanzando por Sierras Chicas, como colectivo movilizado contra y más allá del patriarcado y las violencias machistas. Colectivos a los que se suman los sindicatos de Luz y Fuerza, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), sectores del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURBACC), con quienes se colabora en las marchas del “Cordobazo”, contra las privatizaciones; o acompañando el reclamo del colectivo LGBTIQ+, quienes anualmente llevan adelante la marcha por la defensa y el respeto a las diversidades de géneros, las autoadscripciones y contra la represión y violencia machista.

Frente a un capitalismo que ha colonizado los territorios y los cuerpos, las territorialidades asamblearias emancipatorias, autonomistas, en defensa del ambiente, por



la soberanía del agua y la alimentaria, pugnan por la dignidad de los pueblos y las minorías desde los pueblos, con resistencias desde los cuerpos, poniendo el arte y la palabra como armas de reivindicación del derecho a decidir sobre el territorio. Esta realidad está abriendo nuevas sendas de avance en el seno del ecocidio neocolonialista que vive el Gran Chaco sudamericano.

Hoy se pelea palmo a palmo por cada metro de bosque nativo, contra maquinarias y a través de la justicia, con una artillería creciente en lo comunicativo, que permite avanzar mediante asambleas de colectivos apegados al monte. Se ha avanzado en presentar la existencia de lo que ya se ha denominado complejo desarrollista, a la vez que hemos verificado las tensiones de su accionar colonialista interno con el campo político (ambiental) que actualmente se le resiste. Poco a poco se van articulando en cada localidad distintas alternativas societales, inmersas en la lucha por la preservación de su mundo.

Mientras más bosque se pierda más conflictividad habrá; mientras prevalezca el desastre ambiental, mayores serán las resistencias al desarrollismo. Por ello es necesario denunciar que estrategias como la de los circuitos de enduro, motocross y cuatriciclos, las jornadas de responsabilidad ambiental empresaria, las actividades empresariales ambientales en escuelas, la Ley Agroforestal, el reforzamiento con seguridad privada de los campos y ciudades, el marketing y la comunicación masiva de proyectos con un discurso ecoamigable o desde la economía verde, y muchas otras, son maniobras para disfrazar la acción y la territorialidad del complejo desarrollista, que se encuentra en franca crisis, pero en continuo auge.

Como se ha visto, la desterritorialización a la que poco a poco se obliga a avanzar al complejo desarrollista, ha sido posible gracias a la movilización social con un eje biocéntrico, apartada de la lógica partidaria, pero con un fuerte apego a la tierra. Se pueden plantear diversas preguntas: ¿qué resultados tendrán estas nuevas territorialidades y geografías de la lucha desde los pueblos?; o ¿qué implicaciones tendrá la represión que se viene gestando desde el desarrollismo neoliberal? La respuesta será siempre la misma: la piedra arrojada con violencia por el complejo desarrollista provocó un desastre mayor, y este desastre resulta doloroso. No obstante, lo que devuelven las comunidades atacadas no son piedras, sino palabras y pasos calmos desde los bosques, los barrios y las casas: caminatas de gente que marcha para cambiar el mundo.

Es por ello que las prohibiciones a la fumigación, la agroecología, las ferias agroecológicas, las redes de consumo consciente (Balmaceda, Deon y Omaña 2019), los ordenamientos territoriales participativos, la bioconstrucción, las mingas, las áreas de conservación municipales y comunales y muchas otras estrategias asamblearias locales y autogestivas, están trazando un nuevo horizonte de vida.

Al cierre de este trabajo (en noviembre de 2020), las más de 410 000 hectáreas incendiadas en Córdoba se sumaban a las 1 255 000 hectáreas afectadas por incendios intencionales en el Gran Chaco, El Espinal y las costas y delta del Paraná. Esto moviliza a cientos de miles de personas reclamando una Ley de Protección de Hu-

medales, la prohibición de venta de las tierras incendiadas y el cumplimiento de las leyes nacionales de protección de bosques nativos (26331 y 26815), para que no se cambie el uso de la tierra de áreas boscosas a negocios urbanos, recreativos, ganaderos o de canteras (Deon 2020).

De este modo, despiertan con fuerza las redes Creando Brigadas Ambientales, los Jóvenes por el Clima, y diversos colectivos en defensa del bosque nativo, las cuencas hídricas y el derecho humano al agua, un ambiente sano y la participación social. En un contexto de vuelta del progresismo al poder nacional, muchos de estos reclamos intentan institucionalizarse, otros son debatidos y un grupo importante de ellos –que interpelan el desarrollismo sostenedor de un progresismo afianzado en la megaminería, la agriculturización<sup>14</sup> (Hocsman 2014) y la agroexportación– están entrando en disputas mediante espacios sociales autónomos, como el de la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Colectivo Paren de Fumigar, la CODEBONA, la Multisectorial ambiental, entre otros espacios donde los actores movilizados siguen dando cuenta de las múltiples territorialidades en tensión.

## Apoyos

Esta investigación se realizó como parte de la beca doctoral 2016-2021 del Consejo Nacional de Investigación Ciencia y Técnica de Argentina (CONICET) y la Secretaría de Educación Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Proyecto Beca COFIN2016-2021 CONICET-UNC. Directores: Luis Daniel Hocsman y Omar Arach.

## Referencias

- Aranda, Darío. 2010. “Los desplazados por la soja y la minería en el país”. Especial: *Periódico Página 12*. Acceso el 18 de septiembre de 2017. <https://bit.ly/3p6KXF9>.
- Ávila Vázquez, Medardo. 2014. “Agricultura tóxica y pueblos fumigados en Argentina”. *E+E: Estudios de Extensión en Humanidades* 4(4): 28-34. Acceso el 18 de noviembre de 2020. <https://bit.ly/3sk0UsI>
- Balmaceda, Nadia Alexandra. 2019. “Desafíos de la agroecología en territorios suburbanos”. *E+E: Estudios de Extensión en Humanidades* 6 (7): 129-154. Acceso el 22 de junio de 2020. <https://bit.ly/3omYqYb>
- Balmaceda, Nadia, Joaquín Deon y Esquisa Omaña. 2019. “Desterritorializando al SATAN (Sistema Alimentario Transgénico del AgroNegocio). Sanando con agroecología, desde Argentina”. Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2019.

<sup>14</sup> Entendida como la ampliación desmedida de la agricultura industrial capitalista.

Desmontando bosque, sumando luchas sociales: territorialidades y alternativas en el desastre ambiental argentino

- Bonavena, Pablo Augusto, y Flabián Nievas. 2014. "La sociedad argentina se militariza: yuxtaposición entre defensa y seguridad". Conferencia pronunciada en VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, 3 al 5 de diciembre. Acceso el 27 de noviembre de 2019. <https://bit.ly/3owSrAl>
- Brunzzone, Elsa. 2008. *Las Guerras del Agua*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Castro, Esteban. 2009. "Luta pela água na América Latina". *Revista IPEA* 6(51): 1-5.
- CEMINCOR (Cámara de empresarios mineros de Córdoba). 2019. "Quiénes somos? Programa de remineralización. Córdoba". Acceso el 15 de febrero de 2021.
- Chiavassa, Sergio, Beatriz Ensabella y Joaquín Ulises Deon. 2017. "Territorialidades en Conflicto y Acciones Colectivas: Las Luchas por el Agua en Sierras Chicas, Provincia de Córdoba, Argentina". *Agua y Territorio*, 10: 43-57. <https://dx.doi.org/10.17561/at.10.3608>
- Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA). 2017. "Para que caiga la ley desarrollista que atenta los bosques nativos". Carta abierta. Córdoba. Acceso el 19 de agosto de 2020. <https://bit.ly/2MiRTAN>
- Deon, Joaquín Ulises. 2015. "Gestión de cuencas: Conflictos por el agua y el uso del suelo, el caso de la cuenca del río Chavascate, Sierras Chicas, Córdoba". Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Córdoba.
- Deon, Joaquín Ulises. 2016. "¿Caminando hacia el movimiento contra el desmonte en Córdoba?". *Cardinalis. Revista del Departamento de Geografía* 4(6): 63-90. Acceso el 18 de mayo de 2020. <https://bit.ly/39XEcPu>
- Deon, Joaquín Ulises. 2020. "Donde hubo incendios negocios quedan. Desmontes, despojos y acaparamientos inmobiliarios, megamineros de canteras y del agronegocio en las Sierras Pampeanas, Argentina". *Naturaleza de Derechos* 2: 45-75. Acceso el 13 de noviembre de 2020. <https://bit.ly/3ce7CvN>
- Escobar, Arturo. 2005. "Antropología y desarrollo". En *Antropología y desarrollo. Encuentros y desencuentros*, compilado por Guillermo Julián Hernández, 29-58. Ciudad de La Habana: Centro Nacional de Superación para la Cultura. Acceso el 27 de enero de 2021. <https://bit.ly/2MyQR3h>
- Garnero, Gabriel. 2017. "Crecientes y sequías: las fluctuaciones estacionales de agua y el origen de los grandes proyectos hídricos en las cuencas del noroeste de Córdoba - Argentina (1880-1925)". *Temas Americanistas*, 38: 107-129.
- González Casanova, Pablo. 2006. "Colonialismo interno [una redefinición]". En *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas*, compilado por Atilio A. Borón, Javier Amadeo y Sabrina González, 409-434. Buenos Aires: CLACSO.
- Gudynas, Eduardo. 2012. "Estado Compensador y Nuevos Extractivismos. Las ambivalencias del Progresismo Sudamericano". *Nueva Sociedad*, 237: 128-146.
- Gudynas, Eduardo. 2015. *Ética biocéntrica y políticas ambientales*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Hocsman, Luis Daniel. 2014. "Agricultura Familiar y descampesinización. Nuevos sujetos para el desarrollo rural modernizante". *Revista Perspectivas Rurales. Nueva Época* 13 (25): 11-27. <http://cemincor.org.ar/que-es-cemincor/>
- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2015. *Anuario estadístico 2015*. Buenos Aires: Ediciones INDEC.
- Machado, Decio, y Raúl Zibechi. 2016. *Cambiar el mundo desde arriba: Los límites del progresismo*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

- Merlinsky, Gabriela. 2017. "Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Notas teórico-metodológicas". *Acta sociológica*, 73: 221-246.
- Moore, Jason W. 2013. "El auge de la ecología-mundo capitalista I. Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la aprobación máxima". *Laberinto*, 38: 9-26.
- Natenzon, Claudia, y Diego Ríos. 2016. *Riesgos, catástrofes y vulnerabilidades. Aportes desde la geografía y otras ciencias sociales para casos argentinos*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Páez, Joaquín; Joaquín Deon y Celeste Camacho. 2017. "Áreas desprotegidas. Análisis de la gobernanza en las áreas protegidas de la Provincia de Córdoba, Argentina". *Cardinalis* 9: 4-41. Acceso el 17 de febrero de 2021. <https://bit.ly/3uBCUU2>
- Paz, Magali, y Santiago Rebollo. 2020. "Intencionalidades, conflictos y resistencias: análisis cualitativo de un proyecto de desarrollo rural en Córdoba, Argentina". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 84: 79-98. Acceso el 17 de noviembre de 2020. <https://bit.ly/2Y2ixQL>
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. 2008. "A Luta pela Apropriação e Reapropriação Social da Água na América Latina". En *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual*, compilado por Bernardo Mançano Fernandes, 195-221. San Pablo: CLACSO.
- Schneider, Christian, Natalia De Luca, y Melina Dassano. 2018. "Ley de Bosques en Córdoba: el sentido de la participación ciudadana en políticas públicas". *Ecos Córdoba*. Acceso el 18 de julio de 2020. <https://bit.ly/36dq6sn>
- Seoane, José, Emilio Taddei y Clara Algranati. 2013. *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL.
- Silveti, Felicitas, Gustavo Soto, Daniel M. Cáceres y Diego Cabrol. 2013. "¿Por qué la legislación no protege los bosques nativos de Argentina?: Conflictos socioambientales y políticas públicas". *Mundo agrario* 13(26): 1-26. Acceso el 23 de junio de 2020. <https://bit.ly/3ooCufk>
- Tapia, Luis. 2009. "Movimientos sociales, movimientos sociales y los no lugares de la política". *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano* 17. Acceso el 22 de abril de 2020. <https://bit.ly/3c96Uj0>
- Tito, Carolina. E. 2019. "Las nociones de justicia que sostienen 20 querellantes de la Causa Madre Ituzaingó". *Cardinalis. Revista del Departamento de Geografía*, 12: 230-251.
- Wahren, Juan. 2015. "Alternativas al desarrollo desde los movimientos sociales. El ñande reko y la búsqueda de la "tierra sin mal" del pueblo guaraní de Tarija, Bolivia". *Revista GeoNordeste* 1(24):8-43.
- Zarrilli, Adrián G. 2020. "Tierra y veneno. La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco Argentino y sus conflictos socio-ambientales (1990-2017)". *Revista de Paz y Conflictos* 13(1): 175-201.
- Zibechi, Raúl. 2015a. *Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias*. Buenos Aires: Ediciones Desde Abajo.
- Zibechi, Raúl. 2015b. "Hacer balance del progresismo". *Revista Kavilando* 7(2): 117-120.

Desmontando bosque, sumando luchas sociales: territorialidades y alternativas en el desastre ambiental argentino

## Legislaciones

Ley Nacional 26331/2007, de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, 19 de diciembre. Acceso el 22 de mayo de 2020. <https://bit.ly/2YR6l5I>

Ley Nacional 26815/2013, Manejo del fuego, 16 de enero de 2013.

Ley Provincial 10004, Implementación del segundo anillo metropolitano de Córdoba, 2 de noviembre de 2011.

Ley Provincial 9526, prohibición minería metalífera en la Provincia de Córdoba, 31 de octubre de 2008. Acceso el 11 de abril de 2020. <https://bit.ly/2ZKdpl8>

Ley Provincial 9841, Primer anillo del área metropolitana Córdoba y plan vial metropolitano, 29 de septiembre de 2010.

Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos la Provincia de Córdoba 9814/2010 5 de agosto de 2010. Acceso el 21 de junio de 2020. <https://bit.ly/3pUSdUk>

Resolución 125/2008 Derechos de exportación. Fórmula de determinación aplicable a determinadas posiciones arancelarias correspondientes a cereales y oleaginosas, 10 de marzo de 2008. Acceso el 12 de abril de 2020. <https://bit.ly/3pOsLzx>

### Cómo citar este artículo:

Deon, Joaquín Ulises. 2021. "Desmontando bosque, sumando luchas sociales: territorialidades y alternativas en el desastre ambiental argentino". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 70: 151-169. <https://doi.org/10.17141/iconos.70.2021.4567>